JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: JI-038/2021

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS

SECRETARIA: MIRIAM JANETH GONZÁLEZ GARZA

Monterrey, Nuevo León, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que confirma el acuerdo ACQYD-CEE-I-157/2021, dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, mediante el cual decreta la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el actor, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-266/2021 y su acumulado PES-267/2021; en virtud de considerarse que fue apegada a derecho la determinación de la responsable.

GLOSARIO

Actor y Denunciante:	Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Representante Propietario ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, C. Gustavo Javier Solís Ruíz.
Acuerdo de medida cautelar:	Acuerdo de medida cautelar ACQYD-CEE-I-157/2021
Denunciados:	Clara Luz Flores Carrales y la Coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León",
Dirección Jurídica:	Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.
Comisión Electoral:	Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Comisión de Quejas y Denuncias:	Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
Ley Electoral Local:	Ley Electoral para el Estado de Nuevo León
Tribunal:	Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

RESULTANDO:

1. ANTECEDENTES.¹ De las constancias que integran el expediente se desprende lo siguiente:

1.1. Recepción de ambas denuncias. El veintisiete de marzo, el *Denunciante* presentó ante la *Comisión Electoral* dos denuncias de hechos en similares términos en contra de los *Denunciados* por presuntas violaciones a la *Ley Electoral Local*, consistente en la presunta violación a las reglas sobre el contenido de propaganda electoral para los partidos políticos, coaliciones y candidatos.

En el mismo escrito, solicitó a la *Comisión Electoral* que declarara procedente la medida cautelar y se retirará de forma inmediata la propaganda denunciada.

1.2. Radicación y admisión de las denuncias. El veintiocho de febrero, la *Dirección Jurídica* radicó y admitió las denuncias como procedimientos especiales sancionadores, determinando la acumulación de las mismas por existir conexidad en ellas, las cuales quedaron registradas con la clave PES-266/2021 y acumulado PES-267-2021, ordenando la realización de diversas diligencias.

1.3. Acuerdo reclamado. El treinta de marzo, la *Dirección Jurídica* sometió a consideración de la y los integrantes de la *Comisión de Quejas y Denuncias* el *Acuerdo de medida cautelar*, en el sentido de declararla improcedente, mismo que fue aprobado por unanimidad el treinta y uno de marzo. Dicha determinación, se notificó vía electrónica al *Denunciante* el uno de abril.

1.4. Juicio de Inconformidad. El cinco de abril, el *Actor y Denunciante* promovió juicio de inconformidad en contra del *Acuerdo de medida cautelar*.

1.5. Radicación, admisión y turno a ponencia. El ocho de abril, la Magistrada Presidenta de este *Tribunal* dictó un acuerdo en el que admitió a trámite la

¹ Las fechas que se citan corresponden al dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.

demanda del juicio; se ordenó el emplazamiento correspondiente y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley.

1.6. Informe previo y justificado. El nueve y once de abril, la responsable remitió al *Tribunal* el informe previo y justificado, respectivamente, anexando al primero de ellos un cuadernillo de copias certificadas.

1.7. Terceros Interesados. No compareció nadie al desahogo la vista concedida.

1.8. Audiencia de ley. El dieciséis de abril se celebró la audiencia de calificación, admisión y recepción de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 305 de la *Ley Electoral Local* y se declaró cerrada la instrucción, poniéndose el asunto en estado de sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

2. COMPETENCIA

El *Tribunal* es competente para conocer y resolver el presente asunto, ya que se trata de un juicio de inconformidad promovido por el *Actor y Denunciante* mediante el cual controvierte el *Acuerdo de medida cautelar* emitido por la *Comisión de Quejas y Denuncias*, dentro de un procedimiento especial sancionador.

Lo anterior con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso I) de la Constitución Federal; 44 y 45, primer párrafo, de la Constitución Local; y, 291 de la *Ley Electoral Local*.

3. PROCEDENCIA

El presente juicio cumple los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 297 de la *Ley Electoral Local*, como enseguida se explica:

a) Oportunidad. Se promovió dentro del plazo legal de cinco días, ya que el *Acuerdo de media cautelar* reclamado se aprobó el treinta y uno de marzo, se notificó al *Actor y Denunciante* el uno de abril, y la demanda se presentó el día cinco de abril.

b) Forma. La demanda se presentó por escrito ante el *Tribunal*, en ella consta el nombre del promovente y su firma autógrafa; asimismo, se identifica el acto impugnado, se mencionan hechos y agravios, además de los artículos supuestamente violados.

c) Legitimación. Se satisface este requisito, porque se trata de un partido político nacional, quien, a través de su representante legal, controvierte el *Acuerdo de medida cautelar* emitido por la responsable.

d) Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, en virtud de que el *Acuerdo de medida cautelar* impugnado pudiera eventualmente vulnerar la esfera jurídica de derechos del *Actor y Denunciante*, pues en caso de resultar fundados los agravios que plantea, se revocaría el mismo y se ordenaría el retiro de la propaganda denunciada.

e) Definitividad. El requisito en cuestión está colmado, toda vez que la *Ley Electoral Local* no prevé un medio de impugnación que deba ser agotado de manera previa a este juicio.

4. TERCERO INTERESADO. No compareció nadie.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Hechos denunciados

El *Denunciante* en sus escritos de denuncia que motivaron los procedimientos especiales sancionadores PES-266/2021 y su acumulado PES-267/2021, expresó, esencialmente, que la omisión por parte de la candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, de no colocar los emblemas de los Partidos Morena, Del Trabajo y Nueva Alianza de Nuevo León, así como el nombre de la coalición de la cual forman parte, y solo difundir el emblema del Partido Verde Ecológico de México, dentro de su propaganda electoral, sin colocar, los demás logos y colores de los partidos miembros de la coalición, ocasionan confusión entre el electorado.

5.1.2. Consideraciones de la *Comisión de Quejas y Denuncias* al emitir el *Acuerdo de medida cautelar impugnado*

La *Comisión de Quejas y Denuncias* aprobó por unanimidad de votos el *Acuerdo de medida cautelar* en el que determinó declarar su improcedencia.

Lo anterior, toda vez que de forma preliminar razonó que, no se acredita ninguna vulneración a la normativa electoral en materia de propaganda política, ya que las omisiones denunciadas no tienen el alcance de causar confusión en el electorado al momento de emitir su voto en las urnas el día de la elección, toda vez que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, por lo que, el hecho de que los partidos integrantes de determinada Coalición, realicen propaganda individual, o conjunta entre algunos de los partidos integrantes de la misma, no crea confusión en la ciudadanía, lo anterior de conformidad con el artículo 87, numeral 12, de la Ley General de Partidos Políticos.

5.1.3. Agravios hechos valer por el promovente en contra del *Acuerdo de medida cautelar*.

El *Actor y Denunciante* promovió este juicio cuya *pretensión* es que se revoque el acto reclamado y se decrete la procedencia de la medida cautelar para efectos de que se retire de manera inmediata la propaganda denunciada.

En su escrito alega sustancialmente que el *Acuerdo de medida cautelar*, viola los principios de exhaustividad y legalidad, toda vez a su consideración la autoridad responsable no realiza un estudio exhaustivo de los hechos denunciados, y que a su parecer existe la obligación de los Partidos Morena, Del Trabajo y Nueva Alianza de Nuevo León, promocionar con sus logos y colores a la candidata denunciada, ya que al no hacerlo incumple con lo establecido en las normas electorales.

También aduce que ocasiona una grave confusión entre el electorado al no realizar de forma adecuada la propaganda.

Señala que del contenido establecido en los artículos 242, y 246 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 159 y 161 de la *Ley Electoral Local*, se desprende la obligación que corresponde a los Partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Nuevo León, de promocionar su emblema y colores en la propaganda de la candidata que postuló en coalición, ya que al no hacerlo así, no solo incumple lo establecido en las normas electorales, sino también ocasiona una grave confusión entre el electorado.

En base a lo anterior considera que se desprende la obligación que corresponde a los Partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza de Nuevo León, los cuales actualmente se encuentran coaligados, el promocionar con sus logos y colores a la candidata denunciada, ya que al no realizar tal acción no solo incumple con lo establecido en las normas electorales, también ocasiona una grave confusión entre el electorado.

Además, refiere que no resulta aplicable la tesis en la que la se sustenta la autoridad responsable, para negar la medida, de rubro: **“PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN LA POTESTAD DE INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS INTEGRAN, CUANDO SE IDENTIFICA PLENAMENTE AL CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”**, toda vez que del panorámico denunciado no se incluye el nombre de la coalición que la postula.

Bajo ese argumento, puntualiza que la autoridad electoral debe hacer valer la obligatoriedad de la correcta identificación de los candidatos de las coaliciones y partidos en cada propaganda, acto de proselitismo o debate, con el fin de que exista una ciudadanía informada de las opciones políticas que pueden ser votadas en las diversas elecciones que se presentan en cada proceso electoral.

Por último, indica que, en el caso del dictado de medidas cautelares la autoridad no sólo estará atenta al análisis bajo la apariencia del buen derecho, como lo solicita la norma, sino que también debe analizarse el peligro en que se encuentran los principios rectores del derecho electoral en relación a la propaganda emitida por los denunciados.

Por tanto, el **problema jurídico** a resolver consiste en determinar si fue apegado a Derecho el acto reclamado dictado por la responsable al establecer la improcedencia de la medida cautelar solicitada.

Precisando lo anterior, toda vez que los agravios se encuentran estrechamente vinculados, se atenderán de manera conjunta, considerando que ello no causa afectación jurídica alguna, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental es que todos sean estudiados.²

5.2. Marco jurídico

5.2.1. Naturaleza de las medidas cautelares

La *Sala Superior* ha establecido el criterio de que **la naturaleza de las medidas cautelares** gravita en función a un pronunciamiento preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sobre derechos o principios que potencialmente podrían ser vulnerados por la o las conductas objeto de análisis.³

En tal virtud, la apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió, en este caso, una medida cautelar; de tal suerte, que no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de la cuestión planteada, se realice desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión, pues de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter de legalidad de la conducta, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo, tratándose de un procedimiento especial sancionador.

² Lo cual es acorde con la Jurisprudencia 4/2000, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: **“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”**

³ Véase la jurisprudencia 14/2015, de rubro: **“MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA, así como la tesis XII/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL QUE SE PRESENTA”**.

Dado lo anterior, es evidente que la procedencia o improcedencia de las medidas cautelares son dictadas por la autoridad, en forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

5.3. Los agravios hechos valer por el Actor y Denunciante no controvierten las consideraciones emitidas por la Comisión de Quejas y Denuncias para decretar la improcedencia de la medida cautelar solicitada.

En la especie, la *Comisión de Quejas y Denuncias*, en lo que interesa, sustentó su determinación básicamente en lo siguiente:

*“...Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 14/2003, de rubro: **EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ**, ha establecido que los colores que tienen registrados los partidos políticos no pueden considerarse exclusivos de éstos, pues la adopción de determinados colores, símbolos, lemas y demás elementos separados que conforman el emblema de un partido político, no le generan el derecho exclusivo para usarlos.*

*Así también, en la jurisprudencia VI/2018, de rubro: **PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN LA POTESTAD DE INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LAS INTEGRAN, CUANDO SE IDENTIFICA PLENAMENTE AL CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)**, precisó que es suficiente que en la propaganda impresa se incluya la imagen del candidato, el cargo al que contiene y la coalición que lo postula, para que se cumpla el objetivo de este tipo de propaganda, sin que sea necesario que se incorporen los emblemas de cada uno de los institutos políticos que la conforman, en razón de que queda a la libre autodeterminación de éstos la manera en que decidan informar a la ciudadanía la candidatura registrada, así como la identificación de la coalición postulante.*

En ese contexto, es menester precisar que mediante acuerdo CEE/CG/082/2020, emitido el Consejo General de esta Comisión, en fecha 3 de diciembre de 2020, se aprobó el registro del convenio de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, celebrado por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.⁴ Ahora bien, tenemos que el Denunciante señala que, en el particular, se contravienen las normas sobre propaganda política electoral, por la omisión de incluir en la propaganda denunciada, los emblemas de los partidos que integran la Coalición Denunciada. Omisiones que, se desglosan de la siguiente forma:

1. El emblema del Partido Verde, en la propaganda colocada en los panorámicos marcados con los números 1 y 3; y

⁴ Lo que se corrobora en el siguiente enlace electrónico:

<https://www.ceenl.mx/sesiones/2020/acuerdos/ACU%20CEE-CG-82-2020%20Coal%20JHNL.pdf>

2. Los emblemas de los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, Nuevo León, en la propaganda colocada en los panorámicos marcados con los números 2, 4 y 5.

Así, para dotar de mayor claridad al presente acuerdo, se estima conveniente realizar el análisis de mérito, dividido en los puntos anteriormente señalados.

Omisión de incluir el emblema del Partido Verde.

Entonces, como se precisó en líneas precedentes, el Denunciante se duele que la propaganda señala en sus escritos iniciales, no se incluyó el emblema del Partido Verde, lo que en la especie se corrobora con los panorámicos identificados con los números 1 y 3, lo que, en estima de esta autoridad, de forma preliminar, no contraviene la normativa electoral.

Lo anterior se sostiene así, toda vez que con las características que se advierten de la propaganda denunciada, se encuentra plenamente identificable a la candidata, aquí Denunciada, ya que, de la propaganda colocada en los referidos panorámicos, se advierte la imagen de la Denunciada del lado izquierdo, y la del candidato a alcalde de Monterrey, del lado derecho. Advirtiéndose a la altura de la cabeza de ambos candidatos el nombre de los mismos. En cuanto a la Denunciada, se advierte la palabra CLARA, apreciándose que las letras conforman su nombre en diferentes colores, la "C", en color quindo, "L", en color naranja, "A" en color amarillo, "R", en color verde, y, "A", en color turquesa, luego, debajo de su nombre, se aprecian las leyendas "GOBERNADORA" y debajo de dicha frase, en letra más pequeña, se aprecia la palabra "CANDIDATA". En cuanto al diverso candidato, se advierte la palabra VICTOR, apreciándose las letras que lo conforman en diferentes colores "V", en color azul marino, "I", en color turquesa, "C", en color verde, "T", en color amarillo, "O", en color naranja, y "R" en color quindo, debajo de su nombre se aprecian las leyendas "ALCALDE DE MONTERREY" y debajo de dicha frase, en letra más pequeña, se aprecia la palabra "CANDIDATO".

Elementos los anteriores con los cuales, existe una identificación precisa de la coalición que registró a la Denunciada, tal y como lo exige el numeral 161, primer párrafo, de la Ley Electoral.

En ese sentido, se considera de forma preliminar que, el hecho de que el emblema del Partido Verde Ecologista de México, no se advierta en la propaganda denunciada, no contraviene la legislación de la materia, toda vez no es obligatorio que se presenten los emblemas de cada uno de los partidos que conforman determinada coalición, pues queda a la libertad de autodeterminación de los institutos políticos, la manera en que decidan informar a la ciudadanía respecto de los integrantes que conforman la coalición.⁵

Además, se estima que el objetivo de que la propaganda sea identificada, es no generar una confusión en la ciudadanía, lo que en el presente caso no acontece, ya que se considera que es dable advertir el cargo por el cual aspira la Denunciada y las entidades políticas que la postulan.

Así, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se considera que la referida propaganda electoral cumple con los requisitos previstos en la legislación electoral para su difusión, máxime que tiene como finalidad la

⁵ La Sala Regional Monterrey, en la sentencia SM-JRC-105/2018, precisó que al hablar de *identificación precisa*, equivale a hablar de un carácter idéntico de los logotipos respecto a los registros que los partidos políticos hacen de ellos.

promoción de una candidatura a un cargo de elección popular, por lo que se estima bajo un estudio preliminar, que no genera confusión en el electorado.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior, en la sentencia SUP-JRC-0168/2017.

Omisión de incluir los emblemas de los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza.

Ahora bien, en lo que toca a la omisión de incluir a los emblemas de los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza, que se evidencia en los panorámicos 2, 4 y 5, tampoco se está frente a una vulneración a la normativa electoral.

Se sostiene lo anterior, ya que de la propaganda sometida a estudio en el presente apartado, se advierte que en la misma se encuentra plenamente identificable a la candidata, aquí Denunciada, ya que, de la publicación señalada por el Denunciante, se advierte la imagen de la Denunciada, así como las letras que componen su nombre, en diferentes tonalidades de verde. Asimismo, al lado izquierdo de la imagen de la Denunciada se aprecia el cargo de elección popular para el cual contiene, luego, al lado derecho de la imagen de la Denunciada, se aprecia la frase "EQUIPO NUEVO LEÓN". Igualmente, se aprecia el emblema del instituto político que la postula, es decir, el Partido Verde.

*En ese sentido, se considera de forma preliminar que, el hecho de que los emblemas de los Partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Nuevo León, no se adviertan en la propaganda denunciada, no contraviene la legislación de la materia, toda vez que no es obligatorio que se presenten los emblemas de cada uno de los partidos que conforman determinada coalición, pues queda a la libertad de autodeterminación de los institutos políticos, la manera en que decidan informar a la ciudadanía respecto de los integrantes que conforman la coalición.*⁶

Además, se estima que el objetivo de que la propaganda sea identificable, es que no se genere una confusión en la ciudadanía, lo que en el presente caso no acontece, ya que de la propaganda denunciada se advierte el cargo por el cual aspira la Denunciada, y uno de los partidos que la postula.

*Sin que obste que en el particular no se advierta el nombre de la Coalición, toda vez que los partidos políticos cuentan con libertad de decidir la estrategia para comunicarse con los electores, pudiendo optar por una propaganda que invite a votar a favor del candidato correspondiente, siempre y cuando se identifique al partido postulante o coalición.*⁷

*Siendo que en el caso que capta nuestra atención, se identifica al Partido Verde, resultando importante precisar que, en el convenio de la Coalición, en su cláusula "VIGÉSIMA SEGUNDA, DE LA PUBLICIDAD DE LA COALICIÓN Y DEL RETIRO DE LA PROPAGANDA", los partidos integrantes de la Coalición acordaron que, en el caso del Partido Verde, su propaganda aparecería su logotipo de manera individual.*⁸

Aunado a que se considera de forma preliminar, que dicha estrategia empleada por el Partido Verde es permisible, en virtud de que guarda una

⁶ La Sala Regional Monterrey, en la sentencia SM-JRC-105/2018, precisó que al hablar de *identificación precisa*, equivale a hablar de un carácter idéntico de los logotipos respecto a los registros que los partidos políticos hacen de ellos.

⁷ Criterio adoptado por la Sala Regional Monterrey en la sentencia SM-JRC-0104-2018.

⁸ Convenio que fuera aprobado mediante acuerdo CEE/CG/82/2020, en fecha 3 de diciembre de 2020, por el Consejo General de la Comisión, visible en el siguiente enlace electrónico

<https://www.ceenl.mx/sesiones/2020/acuerdos/ACU%20CEE-CG-82-2020%20Coal%20JHNL.pdf>

debida armonía con lo estatuido por el artículo 87, numeral 12, de la Ley General de Partidos Políticos que dispone que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.

Respecto de dicho numeral, la Sala Superior, precisó que la teleología de dicha disposición es permitir diferenciar perfectamente y en lo individual los sufragios obtenidos por cada partido integrante de la coalición, con lo cual se respeta el sentido del voto de los ciudadanos, se evita la transferencia de sufragios entre los integrantes y permite que cada instituto político pueda medir su representatividad y fuerza electoral para efectos, tanto de la asignación como para la conservación del registro y la distribución de prerrogativas estatales.⁹

Luego entonces, la estrategia desplegada por el Partido Verde, al promocionar de manera individual la candidatura de la Denuncia, sin relacionar dicha candidatura con la Coalición que la postula, se considera que es permisible por la normativa electoral, ya que cada partido político debe medir su representatividad y fuerza electoral para efectos, tanto de la asignación como para la conservación del registro y la distribución de prerrogativas estatales.

En tal virtud, el hecho de que la propaganda denunciada no contenga el nombre de la Coalición, no implica una contravención a las normas sobre propaganda electoral, ya que se encuentra plenamente identificable tanto la candidata postulada, como el cargo para el que se postula la misma.

Así, de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se considera que la referida propaganda electoral cumple con los requisitos previstos en la legislación electoral para su difusión, máxime que tiene como finalidad la promoción de una candidatura a un cargo de elección popular, por lo que se estima bajo un estudio preliminar, que no genera confusión en el electorado.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior, en la sentencia SUP-JRC-0168/2017.

Luego entonces, en virtud de los razonamientos expuestos con antelación, se reitera que en el particular, y de forma preliminar, no se acredita ninguna vulneración a la normativa electoral, en materia de propaganda política, ya que, como se dijo, las omisiones denunciadas no tienen el alcance de causar confusión en el electorado al momento de emitir su voto en las urnas el día de la elección, toda vez que independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, por lo que, el hecho de que los partidos integrantes de determinada Coalición, realicen propaganda individual, o conjunta entre algunos de los partidos integrantes de la misma, no crea confusión a la ciudadanía, lo anterior de conformidad con el artículo 87, numeral 12, de la Ley General de Partidos Políticos...”.

Por su parte, el Actor y Denunciante, enderezó sus argumentaciones, sustancialmente, conforme a lo siguiente:

⁹ Sentencia SG-JRC-53/2019 y acumulados SG-JDC-246/2019 y SG-JDC-252/2019

“..Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se desprende el significado de lo que es la propaganda electoral y de la definición antes descrita se precisa la finalidad de la misma, que es la presentación e informar de forma precisa al electorado por parte de los partidos políticos de las candidaturas registradas y en el caso que ahora nos ocupa y de los hechos denunciados se desprende que la candidata denunciada CLARA LUZ FLORES CARRALES y la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NUEVO LEÓN” incurrieron en la ilegalidad al no incluir dentro de los diversos medios propagandísticos exhibidos ante la ciudadanía la totalidad de los logotipos de los partidos que conforman la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR NUEVO LEÓN” la cual está integrada por los partidos MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA ALIANZA DE NUEVO LEÓN y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, se reunieron en coalición y registraron en forma conjunta a la ahora denunciada como candidata a la Gubernatura del Estado Nuevo León, por lo tanto debe considerarse que el registro de la candidata fue realizado por TODOS LOS PARTIDOS miembros de la mencionada coalición, por lo tanto, también es obligación de los PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA ALIANZA, realizar la presentación de la candidatura que postulo en coalición con el partido mencionado con antelación..”

“... De lo anteriormente expuesto, como bien lo ha razonado la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la utilización del nombre de una coalición con fines propagandísticos, sin que obra la existencia de la misma en el estado donde se postula determinada campaña puede generar una confusión en el electorado al momento de emitir su voto en las urnas el día de la jornada electoral, la realización de coaliciones por parte de los partidos políticos es parte del sistema democrático de nuestro país, sin embargo, la incorrecta utilización de los elementos que la conforman puede generar una grave confusión entre el electorado, ya que, en el caso concreto al no establecer en los elementos propagandísticos de la denunciada la existencia de la totalidad de los partidos que la conforman como miembros de la coalición que postulo como candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León a la C. CLARA LUZ FLORES CARRALES, podría devenir en una confusión entre los simpatizantes de los mencionados institutos políticos, ya que como se ha mencionado con antelación, la utilización conformación diversa y constante de coaliciones por parte de los partidos políticos denunciados y de muchos otros ha formado en el electorado un grado de desconocimiento y por lo anterior al momento de emitir su voto durante la jornada electoral, no podrán determinar con precisión si el partido de su elección ha participado en la mencionada coalición y si la plataforma electoral que han decidido apoyar es la que su partido político ofrece al electorado es la que el partido político de la que es simpatizante ofrece, ahora bien, podría suponerse también la adición de los mencionados partidos a otras coaliciones distinta a la que en este momento forma parte, ya que como lo establece la propia autoridad el mencionado promocional no cuenta con el nombre de la coalición que postula a la denunciada, lo cual resulta en una infracción aun mayor ya que conlleva un grado mayor de confusión ante el electorado y como acertadamente razono la Sala Superior en el juicio citado con antelación el nombre de una coalición resulta de vital importancia para su identificación...”

De las transcripciones anteriores se advierte que el Actor y Denunciante, se limita a reiterar las razones por las cuales se debe considerar que la propaganda denunciada contraviene la normatividad electoral, y que por consiguiente se debe decretar la procedencia de la medida cautelar solicitada, para efectos de que la misma sea retirada de manera inmediata.

En tal virtud, al no formular alegato alguno en contra de los razonamientos en los que la autoridad responsable sustentó el *Acuerdo sobre la medida cautelar*, sino por el contrario, basa sus conceptos de anulación en reiterar la calificación de la conducta que originó el procedimiento especial sancionador, sus agravios resultan **INOPERANTES**.

Se dice lo anterior, toda vez que sustenta su demanda en argumentos que ameritan ser examinados cuando se resuelva el fondo materia del procedimiento especial sancionador, pues hasta ese momento corresponde determinar si la propaganda denunciada pudiera o no tratarse de una infracción a la normatividad electoral, ello en razón de que dicho estudio, requiere de un análisis más determinado respecto a los hechos denunciados en relación con los medios probatorios que a lo largo de la sustanciación se alleguen al expediente.

Ahora bien, no pasan desapercibidas para este *Tribunal* las manifestaciones realizadas por el *Actor y Denunciante*, en relación a que la autoridad responsable comete una supuesta violación a los **principios de exhaustividad y legalidad**; sin embargo, del análisis al agravio señalado, se advierte que en el mismo, únicamente reitera, sus alegaciones que consisten en una mera resistencia a la determinación emitida por la responsable, en el sentido de exponer nuevamente sus razones de porqué la propaganda denunciada contraviene las disposiciones electorales aplicables, por lo tanto, dichos agravios también resultan **INOPERANTES**, al tratarse de cuestiones que deben resolverse en la sentencia que ponga fin al procedimiento especial sancionador.

Por último, cabe decir que lo sostenido en el presente fallo, en modo alguno prejuzga sobre lo que este *Tribunal* resuelva al estudiar el fondo del asunto, lo cual requerirá de un examen de todos los elementos probatorios que obren en el expediente, ello a la luz del estudio, interpretación y aplicación del marco jurídico conducente, lo cual exige un estudio de fondo y no meramente preliminar, a diferencia de lo que acontece con la medida cautelar.

En consecuencia, al resultar **inoperantes** los agravios expuestos por el *Actor y Denunciante*, procede confirmar el *Acuerdo de medida cautelar* reclamado.

6. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se **confirma** el acuerdo impugnado.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por **UNANIMIDAD** de votos de la Magistrada **Claudia Patricia de la Garza Ramos** y los Magistrados **Jesús Eduardo Bautista Peña** y **Carlos César Leal Isla García**, en sesión pública celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Fue Ponente la primera de las personas nombradas, ante la presencia del licenciado **Arturo García Arellano**, Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, quien autoriza y **DA FE**.

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA

RÚBRICA
MTRO. JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. ARTURO GARCÍA ARELLANO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

- - - La sentencia que antecede se publicó en la lista de acuerdos de este Tribunal el veintiuno de abril de dos mil veintiuno. **Conste.Rúbrica**